

El 45% de los afectados por una ejecución hipotecaria tiene ingresos

CAMILO S. BAQUERO, **Barcelona**
Tener un trabajo ya no es garantía de poder afrontar el gasto de un techo. Esta precarización es una de las conclusiones del estudio *Emergencia Habitacional y derecho a la*

vivienda en Cataluña, presentado ayer por el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El informe recoge datos de las entrevistas a más de 900 afecta-

dos. El 45% de ellos tiene un trabajo pero, sin embargo, no puede hacer frente a sus cuotas o al alquiler de su piso. El desahucio ya no es un drama que solo viven las personas en el paro o que dependen de ayudas sociales.

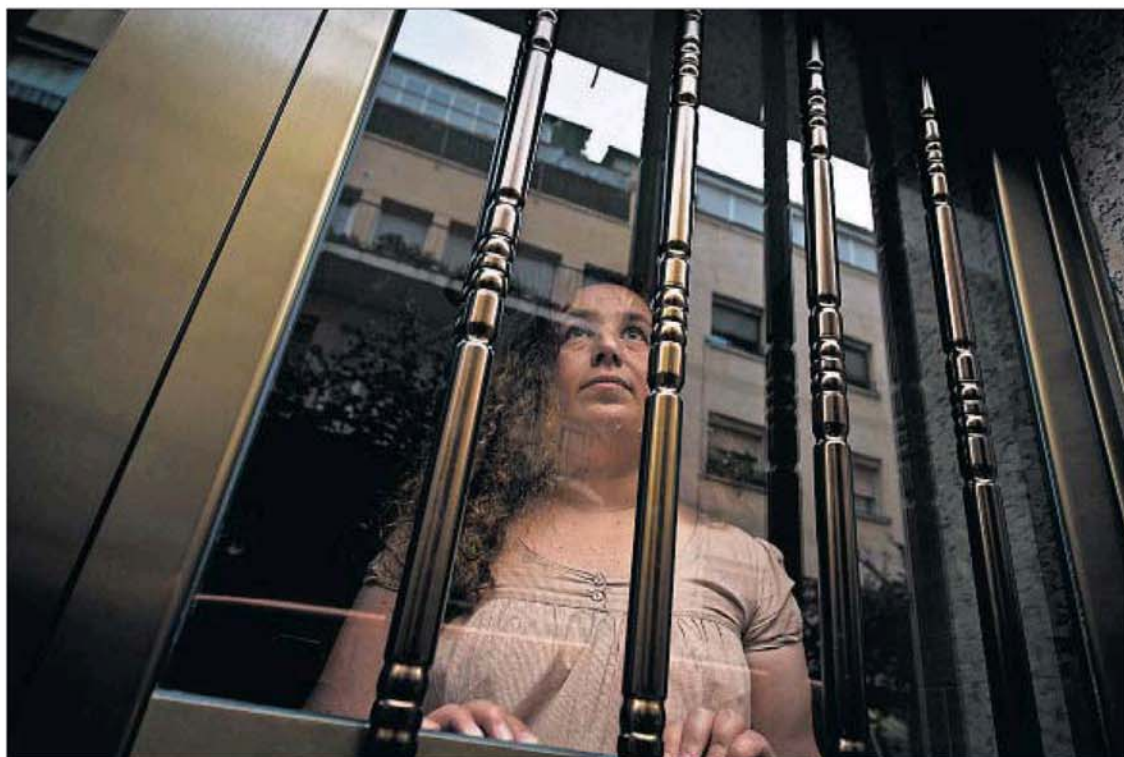
Flor Muzzio, de 41 años, es un ejemplo de este cambio de paradigma. Esta argentina vive con su esposo y sus hijos, de 7 y 4 años, en un piso en el distrito de Nou Barris, que adquirieron en 2005 gracias a una hipoteca con Caixa Catalunya por 196.000 euros. El inmueble ahora es propiedad del fondo Blackstone. Su deuda asciende a 177.000 euros y está negociando una quita.

"En 2010 perdí mi trabajo y como sólo teníamos los 1.100 euros del sueldo de mi marido como camarero de un hotel. Intentamos que nos quitaran la cláusula IRPH de la hipoteca para bajar la cuota. Llegamos hasta a pagar 1.150 euros mensuales. Después pedimos una carencia y, finalmente, dejamos de pagar", recuerda esta profesional en relaciones públicas que antes trabajaba en una entidad bancaria.

"En 2013 el número de empleados que no podían hacer frente a los pagos era del 34%. Es un aumento de 10 puntos. Esto refleja la precarización de la clase trabajadora", asegura Carles Macías, portavoz de la PAH. El 12% tiene un contrato laboral temporal y el 6% son autónomos, explica el informe.

Cerca del 40% de los encuestados está en el paro, lo que duplica la cifra del IDESCAT en Cataluña. Sólo un 15% tiene prestación por desempleo, cuatro puntos por debajo de lo que mostraba el mismo informe en 2013. El 24% no tiene empleo ni recibe ninguna ayuda.

Flor Muzzio entró en la PAH en 2010. "Cuando llegué sufría de mareos, vista nublada, vivía nerviosa. Escuchando los casos de otros te dan más ganas de luchar y de tomar decisiones. Te sientes acompañada", explica la vecina de Nou Barris. Precisamente, el estudio de DESC y la PAH también buscaba conocer los efectos



Flor Muzzio, en la portería de su piso en el distrito barcelonés de Nou Barris. / JUAN BARBOSA

en la salud de enfrentarse a un desahucio. El 40% de los hombres y el 57% de las mujeres encuestadas aseguran tener una percepción regular o mala de su salud, explica Laura Palencia, investigadora de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. En la población general estos porcentajes son del 14% y el 18%, respectivamente, según la Encuesta de Salud de Catalunya de 2013.

"En Europa es visto como una rareza que que tengamos tantos pisos vacíos", explica Vanesa Valiño, la directora del DESC, que recuerda que según el INE en Cataluña hay 450.000 pisos vacíos en manos de la banca. "No es necesario inventar nada. Podemos adaptar las normativas de países de alrededor", agrega. Un 17% del parque para pisos públicos sería el nivel óptimo: unos 440.000.

Los servicios sociales alertan de que se les obliga a ir a desahucios

Los trabajadores de los servicios sociales de Barcelona han pedido por carta una reunión "urgente" a la alcaldesa Ada Colau para hablar de su rol en los desahucios. CC OO, UGT y CGT alertan de que mientras el lunes Colau paralizaba un desahucio en Trinitat Vella, "se obligaba a compañeras a asistir a la comisión judicial por otro caso". El protocolo municipal prevé la participación de profesionales de los servicios sociales, sobre todo cuando hay menores de edad en el desahucio. Los trabajadores levantaron el pasado enero

la voz de alarma. En una carta, constataron que el Consistorio no "garantiza un realojo digno" a los afectados. La presencia de los trabajadores forma parte del protocolo firmado hace dos años entre el Ayuntamiento, la Generalitat y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los servicios sociales lamentaron en su carta de enero que el acuerdo parece estar pensado más para "proteger" a los responsables de la justicia que en aplicar una atención social preventiva y proteger el adecuado realojo de los desahuciados.

Asociaciones en defensa de la sanidad pública piden el cese de Boi Ruiz

JESSICA MOUZO, **Barcelona**
Las entidades en defensa de la sanidad pública tomaron ayer la palabra para denunciar la denostada situación del sistema sanitario público. Vetados por la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, a participar en el pleno monográfico que se celebra hoy en la Cámara catalana, sindicatos y plataformas sociales acudieron a la sede parlamentaria la víspera del pleno para radiografiar la situación del sistema público. Las voces de la calle, que fueron invitadas por el grupo parlamentario de ICV, que organizó ayer una jornada participativa, pidieron la dimisión del consejero de Salud, Boi Ruiz.

"Los recortes iniciados hace unos años provocaron indignación, pero solo fueron un terremoto. Ahora estamos sufriendo un tsunami", arrancó Pep Martí, miembro de la Marea Blanca y vicepresidente del Centro de Análisis y Programas sanitarios (CAPS). Más de una decena de organizaciones sociales repasaron la situación del sistema sanitario público, desde el ámbito laboral de los trabajadores hasta la calidad asistencial que reciben los usuarios, pasando por los casos de corrupción que azotan a la sanidad, como el caso *Innova*. Los recortes en las retribuciones de los sanitarios, las "privatizaciones encubiertas" y la externalización de servicios en los hospitales han vuelto a ponerse sobre la mesa como los grandes problemas de la sanidad pública catalana.

Las entidades denunciaron la "degradación" del sistema sanitario y pidieron también la dimisión del director del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Pere Soley. Además, Pep Martí exigió directamente a los grupos de la oposición que, en el pleno de hoy, "blinden lo que queda del sistema sanitario catalán".

Vila cuelela la T-Mobilitat dentro del plan contra la pobreza

C. S. B., **Barcelona**
Los más de 58 millones de euros de la adjudicación de la T-Mobilitat —la concesión a una empresa privada del sistema de pago y acceso al transporte público— están contemplados dentro del presupuesto del plan contra la pobreza que ayer aprobó el Gobierno catalán. La cifra está contemplada en la memoria del plan antipobreza, junto con otras 165 actuaciones directas por un total de 1.066 millones de euros.

La consejera de Bienestar So-

cial, Neus Munté, explicó en rueda de prensa que el presupuesto para este año, que suma lo que diferentes departamentos dedican a luchar contra la pobreza, aumentaba el 25% con respecto al año pasado, 214 millones más. La oposición, sin embargo, mira con recelo que en la lista de medidas se incluyan aspectos como la nueva tarjeta de viaje. De hecho, esa partida representa el 5% del total del dinero que la Generalitat dedicará este año a combatir la exclusión social. En el ámbito de las

medidas para abordar la pobreza energética, por ejemplo, no aparecen los 10 millones de euros que supuestamente están reservados para tal fin y que se pactaron con ERC. Todos los costes de estos programas son asumidos como "coste funcional". Si aparecen consolidados, sin embargo, los 23 millones de euros adicionales para la Renta Mínima de Inserción (185 millones en total).

El documento dice que la T-Mobilitat, responsabilidad del Departamento de Territorio y Sos-

tenibilidad, que encabeza Santi Vila, se incluye dentro del objetivo estratégico de "mejorar y ordenar el sistema de ayudas y servicios para las personas en riesgo de exclusión social". En teoría, este nuevo servicio permitirá implantar una nueva política tarifaria que, por ejemplo, aplique descuentos para desempleados o receptores de la renta mínima de inserción sin necesidad de largas gestiones. Se podrá realizar de una manera más sencilla que el actual mecanismo.

La diputada socialista Eva Granados cree que, si bien hay una vertiente social en el nuevo sistema, es muy objetable que todo el monto del contrato se pueda computar dentro del plan contra la pobreza. Una posición que también defiende la ecosocialista Lau-

ra Massana. Además, la concesión se dio el último semestre de 2014 a SocMobilitat, conformada por CaixaBank, Fujitsu, Indra y Moventia. El documento ya incluye 42 millones de euros en bonificaciones para distintos colectivos. Bienestar no explicó de qué partidas sale el aumento global del presupuesto del plan.

"Lo nuevo de este plan es que se ha aprobado", aseguró Àngels Guiteras, presidenta de la Mesa del Tercer Sector. Las entidades lamentan que "entre todos no hayamos sido capaces de concensuar un pacto de país contra la pobreza", explica Guiteras. La Mesa destaca que el plan sea interdepartamental y que se mantengan ayudas como las de la lucha contra el hambre en verano, que promueve Munté.